

B.C.R.A.

Referencia  
Exp. N° 103.173/86  
Act.



1

RESOLUCION N°

73

Buenos Aires,

3 MAR 2009

**VISTO:**

1. El presente Sumario en lo Financiero N° 786, que tramita en Expediente N° 103.173/86, ordenado por Resoluciones Nros. 401 y 65 de Presidencia, del 24.06.92 y 04.02.94 (fs. 1263/4 y 1294, respectivamente), que se instruye a LA INVERSORA BAHIENSE S.A. COMPAÑÍA FINANCIERA (en liquidación) y a diversas personas físicas por su actuación en esa ex entidad y el Informe previo de elevación cuyos contenido y conclusiones integran la presente.

2. El Informe N° 461/250/91 (fs.1250/62), como así también los antecedentes instrumentales glosados a las actuaciones que dieron sustento a las imputaciones formuladas, consistentes, en:

Cargo 1 -Incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen del efectivo mínimo-.

Cargo 2 -Incorrecta integración de la fórmula 4026 "Operaciones a tasa no regulada"-.

Cargo 3 -Significativa concentración en la cartera crediticia-.

Cargo 4 -Inadecuada ponderación del riesgo crediticio con carencia de antecedentes en los legajos de los prestatarios; incumplimiento de disposiciones de carácter reglamentario y previsiones por riesgo de incobrabilidad insuficientes-.

Cargo 5 -Incorrecta integración de las fórmulas 3519 sobre "Distribución del Crédito por Cliente" y 3827 sobre "Estado de Situación de Deudores"-.

Cargo 6 -Incumplimiento de los controles mínimos a cargo del Directorio-.

Cargo 7 -Excesos en el fraccionamiento del riesgo crediticio-.

Cargo 8 -Captación marginal de fondos y registraciones contables que no reflejaban la real situación patrimonial económica y financiera de la entidad-.

Cargo 9 -Demora en el suministro de información por parte de la entidad a la inspección del Banco Central-.

Cargo 10 -Incumplimiento de las normas mínimas sobre auditorías externas-.

3. Las personas involucradas son: "LA INVERSORA BAHIENSE S.A. COMPAÑÍA FINANCIERA"-e.l.-, FERNANDO ELÍAS, MANUEL EMILIO SANTAMARÍA, JOSÉ ANTONIO GORDOVIL, NORBERTO DANIEL MONTEVERDE, DORA ROSA BERTINELLI DE TORQUATTI, NORBERTO JULIO SARNARI, CATALDO HÉCTOR CENTINEO, ROBERTO HUGO PRIETO, HILDA NORMA OTERO DE ELÍAS, ADRIÁN FERNANDO SANTAMARÍA, ALEJANDRO OSCAR SINIGAGLIA, MARCELO CARLOS JUNCA, GUSTAVO ELÍAS, JOSÉ MARIO ENTERRÍOS, NÉSTOR MARIO GONZÁLEZ, OSCAR IVAN DUKART, JORGE EDUARDO COTABARREN y GLORIA MERCEDES DE PABLO.



B.C.R.A.

Referencia  
Exp. N° 103.173/86  
Act.

Se deja constancia de que el nombre completo del señor Gustavo Elías es Gustavo Fabián Elías, tal como resulta a fs. 1384.

4. Mediante Resolución N° 310 del Directorio del Banco Central de la República Argentina, de fecha 31.07.03 (fs. 1601/4), recaída en el Expediente N° 20.637/03, se resolvió archivar las actuaciones respecto de la señora Gloria Mercedes De Pablo, por su actuación como auditora externa por el cargo 10 formulado en el presente sumario, consistente en Incumplimiento de las normas mínimas sobre auditorías externas, vulnerando lo dispuesto por la Circular CONAU-1, Normas Mínimas sobre Auditorías Externas, Anexo III, Capítulo I-B (pruebas sustantivas Nros. 2, 10, 24 y 4) y Capítulo II-B (pruebas sustantivas Nros. 42 y 45).

5. El auto de fecha 14.05.98 (fs. 1498/500) por el que se dispuso la apertura a prueba del sumario, cuyo cierre se produjo el 07.03.03 (fs. 1549/50).

6. Las partidas de defunción de fs. 1494 y 1542, subfs. 2, acreditan el fallecimiento de los sumariados Dora Rosa Bertinelli de Torquatti y Fernando Elías.

7. Los Dictámenes de la SEFyC Nros. 282/08 del 08.10.08 y 307/08 del 12.11.08, y

#### CONSIDERANDO:

I. Que, con carácter previo a la determinación de las responsabilidades individuales, corresponde analizar las imputaciones formuladas en autos, los elementos probatorios que las avalan y la ubicación temporal de los hechos que las motivan.

De acuerdo con los fundamentos de los informes de inspección Nros 762/19-86, 762/89-87 y 762/78-89 (fs. 2/7, 55/70 y 480/90, respectivamente) se imputaron los cargos que se analizarán a continuación.

#### **Cargo 1 -Incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen del efectivo mínimo-.**

a) Los hechos que constituyen este cargo aparecen descriptos a fs. 1251/2.

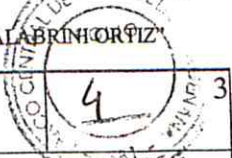
La inspección N° 16/86 advirtió diversos errores en las posiciones de efectivo mínimo correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 1986, a saber:

-No se incluyeron como partida sujeta a exigencia de encaje los cheques emitidos contra cuentas corrientes computables para la integración del efectivo mínimo no cobrados en la fecha de entrega a los beneficiarios.

- Desfasaje de un mes en la consideración como partida pendiente con el B.C.R.A. de las cuotas del préstamo consolidado por capital, intereses y ajustes y la liberación del depósito indisponible de la Comunicación "A" 617.

-Los saldos deudores en cuentas corrientes en bancos comerciales se computaron como negativos a efectos de la determinación de los promedios de integración, en vez de excluirlos de dicho cálculo.



B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.	
<p>-No se computaron los dividendos a pagar en efectivo -puestos a disposición de los titulares- como partida sujeta a exigencia de encaje.</p> <p>-La tasa de cargo por diferimiento del depósito indisponible se aplicó en forma directa, en vez de calcular la efectiva mensual publicada por esta Institución para el caso de meses que tienen más o menos de 30 días (fs. 2/4).</p> <p>Por memorando de fs. 30/2, la inspección indicó a la entidad que procediera a la rectificación de la fórmulas 3000 correspondientes y al ingreso de los cargos por las deficiencias de encaje. En su presentación de fs. 39/41 la entidad dio cuenta de haber tomado nota de lo observado y de efectuar las rectificaciones de caso.</p> <p>La inspección N° 38/87 (fs. 61/2), en el período febrero/abril de 1987, también constató diferencias en la integración e inclusión de partidas sujetas a encaje. Así, la entidad omitió considerar un saldo negativo originado en un cargo por A 7.711 por excesos en el fraccionamiento del riesgo crediticio sobre empresas vinculadas que fuera exigido por memorando del 03.09.85 (fs. 386/90), reiterado el 03.07.86 por nota de fs. 391/3, habiéndose cumplimentado lo indicado con fecha 08.06.87, según surge de fs. 398/9.</p> <p>En febrero de 1987 se omitió considerar por cuatro días el importe de una partida pendiente en concepto de cargos punitivos a favor del B.C.R.A. (fs. 400/2), se determinó una diferencia promedio de A 367 informados de menos en el renglón 3.2.2. (cuentas corrientes en bancos comerciales) del cuadro A de la fórmula 3000, se determinaron pequeñas diferencias en la exigencia de efectivo mínimo relacionadas con el cómputo técnico de depósitos a la vista y en caja de ahorros, resultando para este mes una posición de defecto. Respecto de los meses de marzo y abril de 1987 también se detectaron errores en la integración e inclusión de partidas sujetas a encaje, que se detalla a fs. 61/4, punto 2.</p> <p>Algunas de estas falencias resultan reiteraciones de las observadas por la inspección practicada en el año 1985 ( fs. 107).</p> <p>Corresponde señalar que las normas de este ente rector reglamentando el funcionamiento de la actividad financiera deben ser cumplidas acabadamente por las entidades que forman parte del sistema financiero. Por ello, la infracción se encuentra consumada cuando la inspección verifica el incumplimiento a la normativa aplicable aunque, después, la entidad inspeccionada corrija su conducta.</p> <p>La jurisprudencia se ha expedido sobre el particular puntualizando que: "... La circunstancia de haberse subsanado las anomalías detectadas por el B.C.R.A. en una entidad financiera no purga las irregularidades cometidas por el hecho de las operaciones realizadas en contravención a las normas" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 08.03.88, in re "Almagro Caja de Crédito Coop. Ltda.").</p> <p>Asimismo, dicho Tribunal sostuvo en la Causa "Amersur Cía. Financiera S.A.", del 20.05.88 que: "... La comisión de la infracción bancaria no requiere la existencia de un daño cierto, sea a la propia institución, al B.C.R.A. o a terceros, sino que es suficiente que el perjuicio pueda resultar potencial. La corrección posterior por parte de la entidad de las irregularidades cometidas efectuada a instancia del B.C.R.A. que las detectó a través del ejercicio de su función de control, no es causal suficiente para tenerla por no cometida y exculparla de su responsabilidad".</p> <p>b) El período infraccional se halla comprendido entre abril /86 y abril/87 (fs. 1252).</p>		





B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.
<p>En consecuencia, corresponde tener por acreditados los hechos constitutivos del Cargo 1, en transgresión a lo dispuesto en la Ley N° 21.526, artículos 31 y 36, primer párrafo y por la Comunicación "A" 10-REMON-1, Capítulo I.</p> <p><b>Cargo 2 -Incorrecta integración de la fórmula 4026 "Operaciones a tasa no regulada"-.</b></p> <p>a) La inspección N° 16/86 verificó diversos errores en la confección de las fórmulas 4026 correspondientes los meses de abril, mayo y junio de 1986, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-No se incluyeron las obligaciones y préstamos interfinancieros en los renglones 1.2 y 2.3. del cuadro B de las fórmulas presentadas en abril y mayo (fs.4).</li> <li>-Se informaron incorrectamente los saldos de depósitos a tasa no regulada en mayo y junio, modificándose la remuneración del activo financiero (BONOR) de esos meses (fs. 4 ).</li> <li>-Se informaron incorrectamente los préstamos y obligaciones interfinancieros en junio (fs. 4).</li> <li>-Los promedios de créditos a tasa no regulada se consignaron erróneamente, a raíz de los intereses documentados inherentes a los préstamos amortizables, en lugar de considerar a tal efecto los saldos diarios que registra la cuenta. Independientemente en la fórmula de junio la información tenía un desvío significativo frente a los saldos promedios reales de créditos (fs. 4).</li> <li>-En los meses de abril, mayo y junio se imputaron a recursos propios las operaciones a tasa no regulada, no correspondiendo si en el renglón 8 de las fórmulas 3926 "Aplicación de los recursos propios y del préstamo Circular REMON-1-120" de esos meses se consignó "margen aplicado a otras colocaciones ajustables"(fs. 23).</li> </ul> <p>Las irregularidades detectadas fueron puestas en conocimiento de la entidad a través del memorando de fs. 22/3, en el que la inspección indicó a la entidad que procediera a la remisión de las fórmulas 4026 rectificadas lo que se cumplió conforme surge de fs. 40/1.</p> <p>b) El período infraccional se halla comprendido entre abril y junio de 1986 (fs. 1253).</p> <p>En consecuencia, corresponde tener por acreditados los hechos constitutivos del Cargo 2, en violación a la Ley N° 21.526, artículo 36, primer párrafo, y a la Comunicación "A" 637, Circular REMON-1-213.</p> <p><b>Cargo 3 -Significativa concentración en la cartera crediticia-.</b></p> <p>a) A raíz del análisis de la cartera de créditos de la entidad al 31.03.87, cuyo estudio abarcó los 50 principales deudores de la investigada, la inspección N° 38/87 advirtió que la entidad poseía a esa fecha una elevada concentración en su cartera de préstamos, ya que el 6,9 % del total de clientes adeudaban a la entidad un monto de A 3.526.865 representativos del 65,6 % del total de la cartera de préstamos y del 126,40 % de su responsabilidad patrimonial computable a igual fecha (fs. 55/6 y 1253).</p> <p>Esta concentración resultaba aún más elevada si se tomaban en consideración, por un lado, las irregularidades cometidas en la integración de la fórmula 3519, sobre "Estado de Situación</p>		



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.
----------	--	--



5

de Deudores", donde se verificó la incorrecta declaración de algunos deudores y la omisión de exteriorizar otros y, por otro, la operatoria de "Adelantos" que hacia principios de mes registraba deudas de significación que declinaban hacia la finalización de cada período, implicando una mayor concentración, de efectuarse cortes no coincidentes con los cierres mensuales o trimestrales. (fs. 55/6).

Sobre el particular, la Comunicación "A" 414, Circular LISOL-1 de este Banco Central, en su Capítulo II -Fraccionamiento del riesgo de las operaciones de crédito-, Punto 5. -Distribución de las carteras crediticias- establece que: "Corresponde prestar particular atención a la diversificación de las colocaciones tanto en préstamos y otras modalidades de financiación, como en la cartera de garantías, de manera que las operaciones que representen proporciones significativas de la responsabilidad patrimonial de la entidad queden circunscriptas a magnitudes razonables dentro del total de las carteras activas".

Se trata de una disposición de cumplimiento obligatorio cuya violación conlleva la sanción correspondiente.

La comunicación mencionada consagra una norma de prudencia empresarial para el desarrollo de la actividad financiera, consistente en la necesidad de diversificar el riesgo crediticio evitando la concentración de cartera, de manera tal que un defecto en el cumplimiento de las prestaciones por parte de un determinado deudor no provoque en la entidad una situación crítica que ponga en peligro la continuidad de su actividad.

En el mismo sentido la Jurisprudencia ha señalado que: "... la administración del crédito importa uno de los sectores más importantes dentro de la actividad bancaria, razón por la cual su gobierno está sujeto a reglas y normas rígidas que tienden a que la entidad no vea alterada su fluidez operativa y, por ende, su encuadramiento dentro del sistema. Esto lleva a que la empresa bancaria -y el banquero- deban extremar su cuidado en lo que hace al análisis de los elementos que conforman las ideas de riesgos del crédito, pues esta actividad intermediaria debe ejercitarse no sólo en forma profesional sino insertada dentro de las normas iuspublicistas que la regulan en razón de la naturaleza de los intereses implicados ... Tanto el art. 30 inc. a) de la Ley 21.526 como el punto 3 de la Circular R.F. 25 -normativa ésta última de idéntica redacción a la actual Com. "A" 414 -Cap. II, punto 5- reglan conductas preventivas de aquellos riesgos. La transgresión a éste último tipifica por el sólo hecho de la concentración de magnitud. Si se toma en cuenta que el bien tutelado por las normas es la solvencia del sistema bancario, que la punibilidad reside en la contrariedad objetiva de la regulación y el daño potencial que de ello derive, tanto la posible existencia de dolo como el resultado son indiferentes" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, Causa 7129, autos "Pérez Alvarez, Mario A. c/ Res. 402/83 Banco Central", sentencia del 4 de julio de 1986).

b) La conducta infraccional se verificó el 31.03.87 (fs. 1253).

En consecuencia, corresponde tener por acreditados los hechos constitutivos del Cargo 3, en transgresión a lo dispuesto por la Comunicación "A" 414, LISOL-1, Capítulo II, punto 5.

**Cargo 4 -Inadecuada ponderación del riesgo crediticio con carencia de antecedentes en los legajos de los prestatarios; incumplimiento de disposiciones de carácter reglamentario y previsiones por riesgo de incobrabilidad insuficientes-.**

a) En el desarrollo de las tareas de la inspección N° 38/87 se constató, respecto de los 50 principales deudores, que la política de crédito de la entidad era inadecuada en virtud de haber



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.
----------	--	--

otorgado apoyo financiero sin tomar los recaudos necesarios para asegurar su cobrabilidad (fs. 1254).

En efecto, se otorgaron créditos sin garantía, con bajo porcentaje garantizado con garantía real -sólo el 13,67 % de los 50 mayores prestatarios- (fs. 57). Asimismo, se otorgaron apoyos financieros y refinanciaciones a deudores que carecían de capacidad de pago, o a firmas de reciente constitución, o que registraban atrasos de consideración, o firmas que carecían de actividad o bien a firmas a las que la inspección anterior había considerado total o parcialmente incobrables (fs. 57).

Se detectaron casos en que la entidad incurrió en dilatados períodos de espera para la iniciación de acciones judiciales sobre préstamos vencidos en el año 1985 y que al 31.03.87 no habían pasado al sector de legal para actuar en consecuencia (fs. 58).

Con relación a dos prestatarios cuyas deudas se encontraban amparadas con prenda flotante sobre mercaderías, se constató la inexistencia total o parcial de ellas, no habiendo efectuado la entidad un relevamiento periódico de los bienes que garantizaban sus acreencias a fin de verificar la validez de las garantías que poseían (fs. 56).

Estas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la entidad mediante memorando de fs. 104/5, donde se le indicó reforzar las garantías o constituir gravámenes respecto de un grupo de prestatarios. Las correcciones y ajustes allí ordenadas fueron cumplimentadas (fs. 237).

Corresponde reiterar aquí los conceptos vertidos al tratar el cargo 1 en cuanto a considerar consumada la infracción al incumplimiento aún cuando luego la entidad subsane la situación.

Por otra parte, los funcionarios de este ente rector constataron la existencia de "legajos incompletos" (conf. fs. 1254). Así, se verificó la carencia de la información necesaria para establecer el grado de cobrabilidad de las deudas conforme con la situación económico-financiera de cada deudor y/o sus garantes, como también la falta de otros elementos que debían contener de acuerdo a la normativa vigente a los efectos de evaluar correctamente la capacidad de pago de los mismos.

En el informe de la inspección de fs. 58/9, punto h, aparecen descriptas las deficiencias observadas, consistentes en: balances, estados patrimoniales o manifestaciones de bienes sin certificación de Contador Público, o desactualización de los mismos y carencia de los títulos de propiedad que respalden las declaraciones de los peticionantes o avalistas; carencia o desactualización de elementos que permitan conocer el cumplimiento de obligaciones censales, provisionales o fiscales; carencias de declaraciones juradas del endeudamiento que poseen los prestatarios en el conjunto de entidades financieras u otras entidades de préstamos que actúan fuera del sistema institucionalizado, se verificó la falta casi total de tasaciones y certificados de dominio de los bienes que garantizan las deudas, en especial de las mercaderías gravadas con prenda flotante. Conductas que habían sido objeto de observación en la inspección anterior.

La inspección N° 43/89, con fecha de estudio al 31.05.89, constató también que los legajos de crédito de los deudores se hallaban totalmente desactualizados y no cumplían los requisitos mínimos necesarios para evaluar la situación patrimonial del deudor y su capacidad de pago tal como surge de fs. 482, punto II, ello avalado por acta de fecha 30.05.89 a fs. 691/3.

Respecto de la carencia de antecedentes en los legajos, resulta ilustrativo lo expuesto por la jurisprudencia: "...el banquero debe seleccionar adecuadamente a los futuros clientes mediante un análisis amplio y profundo de su capacidad moral, económico-financiera y empresarial. Así, es





B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.
----------	--	--

responsable el banco por el otorgamiento de créditos indebidos (vgr. autorización para girar en descubierto) y desproporcionados, con lo cual el beneficiario crea una imagen de próspero comerciante frente a terceros que contrataron con él ...responde el banco por el daño que es consecuencia de no haber observado -en el otorgamiento originario de las facilidades financieras, ni en su renovación o mantenimiento- la diligencia a la que estaba obligado por las normas legales que regulan la actividad bancaria y por los parámetros de conducta correspondiente a los usos de la profesión (en el caso se encontró responsable al banco sobre la base de tres elementos: a) la concesión del crédito; b) la desproporción entre el crédito y la situación financiera del beneficiario y c) el conocimiento de tal situación por parte de la entidad -que conoció o debió haber conocido actuando con una normal diligencia profesional-)...”(Cámara Nac. de Apel. en lo Com., Sala E, 05/05/1.989, Bassi, Norberto v. Conti, Vicente).

Se hace presente que el precepto consagrado en el punto 3.1., Cap. I. de la Comunicación "A" 49 (OPRAC-1), aunque no detalle en forma taxativa los componentes con que debe integrarse un legajo, establece claramente que debe contener: "...los elementos mínimos indispensables que posibiliten efectuar correctas evaluaciones acerca del patrimonio, ingresos, rentabilidad empresarial o del proyecto a financiar...", lo cual no acarrea ninguna duda acerca de cuándo un legajo no reúne los requisitos previstos en la aludida norma.

La misma circular dispone en el punto 1.7 que "...Para ello las instituciones deben decidir con prudencia las sumas a comprometer en operaciones financieras, en concordancia con el patrimonio o ingreso de los demandantes y la rentabilidad de los proyectos. En cada caso, la resolución de las solicitudes debe ser precedida por un análisis ponderado de la situación económica y financiera del cliente, con especial énfasis en la determinación de la capacidad de reintegro de los fondos prestados frente a la evolución esperada de la actividad que desarrolla".

La inspección N° 38/87 constató, al 31.05.87, a través del estudio realizado sobre los 50 principales clientes y 200 prestatarios (fs. 71/86)- que las previsiones por riesgo de incobrabilidad - A 418.216- resultaban insuficientes para otorgar adecuada cobertura a la cartera crediticia de cumplimiento irregular, debiendo ser incrementadas en A 719.677 para alcanzar la suma estimada por la inspección de A 1.137.893. Ello representaba un quebranto del 53,9 % de la responsabilidad patrimonial computable de la entidad al 31.05.87 (A 1.335.789), a lo que se agregan los gastos de juicio por los deudores considerados parcial o totalmente incobrables que se encontraban contabilizados en la cuenta "Deudores Varios" cuando correspondían al rubro "Previsiones por riesgo de incobrabilidad", que al 31.03.87 alcanzaba a A 20.000 (ver fs. 59 y 91).

La inspección N° 43/89 analizó al 31.05.89 los créditos concedidos en abril y mayo de 1989 y determinó incrementar las previsiones por riesgo de incobrabilidad al 31.05.89 en A 403.512 millones que representaban el 183,28% de la responsabilidad patrimonial computable a esa fecha (fs. 482, 955 y 959/1130).

Mayor descripción sobre los hechos que constituye el cargo en análisis, obran a fs. 59/60, 110/23, 177/8, 244 y 482.

Se ha sostenido en doctrina que: "...Una correcta operación bancaria activa debe contemplar dos aspectos básicos: el riesgo y la confianza que merece el prestatario. El riesgo está en relación con la persona, el país y la actividad, y las medidas de defensa del riesgo o la prevención del peligro de insolvencia o cesación de pagos se dan por las garantías que deben ser tomadas y también por la observancia de las reglamentaciones del Ente Rector de la política crediticia y las internas de cada banco, así como también por la diversificación de carteras y una adecuada información de los clientes y su actividad, en vinculación con el uso de la tecnología y la





B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.
<p>informática de las centrales nacionales o internacionales de riesgo. Estos elementos y su observancia contribuyen a un buen otorgamiento de créditos y correcto uso del capital prestable de las entidades financieras..." (Héctor A. Benébaz y Osvaldo W. Coll, "Sistema Bancario Moderno", Editorial Depalma, Tomo I, Pág. 229/230, ver además ESCANDELL, José "La cesación de pagos en las entidades financieras y sus derivaciones concursales", RDCO, 1.988, pág. 934).</p> <p>Cabe señalar, la inadecuada política de crédito implementada por la ex entidad reveló la ausencia de recaudos mínimos propios de una sana gestión del negocio bancario. Ello por cuanto no se evaluó correctamente la relación de la deuda de los clientes con su responsabilidad patrimonial, ni tampoco se ponderó la capacidad de pago de los demandantes del crédito ni el riesgo emergente de cada asignación a los fines de exigir la constitución de las garantías adecuadas. Estas falencias llevaron a que la solvencia de la sumariada quedara seriamente afectada y la liquidez se tornara crítica.</p> <p>b) El período infraccional se halla comprendido entre marzo a mayo de 1987 y entre los meses de abril a mayo de 1989 (fs. 1256).</p> <p>En consecuencia, corresponde tener por acreditados los hechos constitutivos del Cargo 4, en transgresión a lo dispuesto por la Ley N° 21.526, artículo 36, primer párrafo, la Comunicación "A" 49, OPRAC-1, Capítulo I, puntos 1.7. y 3.1., la Circular CONAU-1-B, Manual de Cuentas, Código 131901, Previsiones por Riesgo de Incobrabilidad y 530000, cargo por Incobrabilidad, y la Nota Múltiple 505/S.A.-5 del 21.01.75.</p> <p><b>Cargo 5 -Incorrecta integración de las fórmulas 3519 sobre "Distribución del Crédito por Cliente" y 3827 sobre "Estado de Situación de Deudores"-.</b></p> <p>a) Los hechos que constituyen este cargo aparecen descriptos a fs. 1256.</p> <p>La inspección N° 38/87, al 31.03.87, constató diversos errores en la confección de la fórmula 3519: garantías preferidas que no eran tales o se encontraban sobrevaluadas, importes de deuda sin devengamiento de intereses, códigos de situación que no se correspondían con la real situación del deudor, en especial al no declarar deuda alguna con riesgo de insolvencia y al omitir informar deudas que por sus montos debían considerarse, ver fs. 71/2. (fs. 60).</p> <p>También fue detectado que la fórmula 3827 había sido incorrectamente integrada al 31.03.87 (fs. 60), ya que existían otras deudas de menor significación que no se encontraban informadas en el tramo de situación que correspondía, resultando de lo expuesto que la información remitida por la entidad a este Banco Central sobre la conformación y características de sus prestatarios, no resultaba confiable, apareciendo distorsionada significativamente la real situación de la cartera crediticia (fs. 60).</p> <p>Las irregularidades fueron puestas en conocimiento de la entidad a través del memorando de fs. 106, punto 2.1. y 2.2. Cabe destacar que estas observaciones constituyen reiteración de lo observado por la inspección anterior.</p> <p>A fs. 185, punto 2, se indicó a la entidad la remisión de diversa documentación relativa a las garantías detentadas en virtud de haberse observado considerar como privilegiadas garantías en 4° y 5° grado, esto fue cumplimentado por La Inversora Bahiense S.A. Compañía Financiera a fs. 188, punto 2. y documentación de fs. 214/29 ( fs. 1256).</p> <p>b) La conducta infraccional se verificó en marzo de 1987 (fs. 1256).</p>		



B.C.R.A.

Referencia  
Exp. N° 103.173/86  
Act.

FOLIO

10

9

En consecuencia, corresponde tener por acreditados los hechos constitutivos del Cargo 5, en transgresión a lo dispuesto por la Ley N° 21.526, artículo 36, primer párrafo, y por la Circular CONAU-1, C. Régimen Informativo Mensual, Instrucciones para la Integración del Cuadro Estado de Situación de Deudores y D. Régimen Informativo por control interno del B.C.R.A. trimestral/anual, Distribución del Crédito por Cliente, Normas de Procedimiento.

**Cargo 6 -Incumplimiento de los controles mínimos a cargo del Directorio-.**

a) Los hechos que constituyen este cargo aparecen descriptos a fs. 1257.

La inspección N° 38/87 determinó, en el período comprendido entre marzo de 1986 y marzo 1987, la inexistencia de papeles de trabajo respaldatorios respecto de los controles mensuales, trimestrales y semestrales a cargo del directorio, si bien en el libro respectivo se asentaron las tareas realizadas (fs. 65/6 y 412).

El detalle de los incumplimientos advertidos surge de fs. 65/6.

Cabe señalar que tampoco se cumplió con la realización de controles en ocasión de modificarse la constitución del directorio el 13.12.85, 30.11.86 y 08.05.87 -ver Actas de fs. 413/18-. Si bien algunas pruebas se realizaron en fechas cercanas a los cambios de directorio, no existen elementos que permitan establecer que fueron realizadas fuera de la rutina habitual de control y con intervención de los nuevos directivos (fs. 65/6).

En cuanto a la modificación del directorio realizada el 08.05.87 no existen constancias de la realización de los controles, atenta la ausencia de las actas respectivas y la falta de registro de las mismas en el libro habilitado al efecto (fs. 66).

Las irregularidades detectadas fueron puestas en conocimiento de la entidad a través del memorando de fs. 107, punto 5.1, habiendo tomado debida nota de ello en su presentación de fs. 142. punto 5.1.

Cabe destacar que corresponde atribuir responsabilidad a quienes se desempeñaron como miembros titulares del directorio durante el período infraccional, por tratarse de la omisión en el cumplimiento de obligaciones que les estaban expresamente asignadas en su condición de tales.

Esas funciones son de "inexcusable cumplimiento" y conllevan de manera ínsita responsabilidad, ya que la simple aceptación del cargo implica no solo el conocimiento de la totalidad de las normas bancarias sino que importa el sometimiento a un régimen especialmente controlado por esta entidad rectora y, cuando se producen apartamientos, traen aparejada la aplicación de las sanciones previstas en aquél.

b) El período infraccional se halla comprendido entre diciembre de 1985 a marzo de 1985 (fs. 1257).

En consecuencia, corresponde tener por acreditados los hechos constitutivos del Cargo 6, en violación a la Circular I.F. 135, puntos 1 y 2.

**Cargo 7 -Excesos en el fraccionamiento del riesgo crediticio-.**

a) Los hechos que constituyen este cargo aparecen descriptos a fs. 1257/8.





B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.
<p>La inspección N° 43/89 con estudio al 31.05.89 constató que los créditos liquidados durante abril de 1989 a Deleite S.A., Establecimiento Frutícola Ramos S.A., Tierras Punta Alta S.A., Treisi S.A., Pirámides S.A (vinculada) y Ricardo E. Rabbione fueron otorgados incurriendo la entidad en un exceso en el fraccionamiento del riesgo crediticio de A 56,54 millones al 30.04.89, originando el devengamiento de cargos por excesos a esa relación (fs. 680 y 1257).</p> <p>Cabe destacar que estos deudores totalizaban A 89.675 miles, cifra que representa el 220% de la responsabilidad patrimonial computable al 30.04.89 (fs. 680).</p> <p>Respecto a los préstamos concedidos a los deudores mencionados precedentemente como al resto de los prestatarios, en ningún caso se efectuó la ponderación previa de la capacidad de pago de los demandantes de crédito, ni se analizó el riesgo emergente de cada asignación para exigir la constitución de las garantías adecuadas a fin de asegurar la cobrabilidad de los mismos (fs. 482 y 488).</p> <p>Las irregularidades detectadas fueron puestas en conocimiento de la entidad a través del memorando de fs. 512, punto 1.2.</p> <p>Es del caso recordar que la concesión de créditos, íntimamente ligada a la responsabilidad de los directivos encargados de la colocación de los fondos tomados de la clientela, es un aspecto determinante en la vida de las instituciones financieras, de modo tal que la pertinencia o incorrección de los mecanismos utilizados gravita directamente en el mercado bancario y la confianza del público en general.</p> <p>En síntesis, la inadecuada política de crédito implementada por la ex entidad reveló la ausencia de recaudos mínimos propios de una sana gestión del negocio bancario. Ello por cuanto no se evaluó correctamente la relación de la deuda de los clientes con su responsabilidad patrimonial, ni tampoco se ponderó la capacidad de pago de los demandantes del crédito ni el riesgo emergente de cada asignación a los fines de exigir la constitución de las garantías adecuadas. Estas falencias llevaron a que la solvencia de la sumariada quedara seriamente afectada y la liquidez se tornara crítica.</p> <p>Claramente queda en evidencia que la entidad no cumplió con las disposiciones emanadas de este ente rector.</p> <p>b) El período infraccional se halla comprendido entre abril/mayo de 1989 (fs. 1258).</p> <p>En consecuencia, corresponde tener por acreditados los hechos constitutivos del Cargo 7, en violación a lo dispuesto por la Ley N° 21.526, artículo 30, inciso e) y por las Comunicaciones "A" 49, OPRAC-1, Capítulo I, punto 4.3.1.3 y "A" 414, LISOL-1, Capítulo II.</p> <p><b>Cargo 8 -Captación marginal de fondos y registraciones contables que no reflejaban la real situación patrimonial económica y financiera de la entidad-</b></p> <p>a) Los hechos que constituyen este cargo aparecen descriptos a fs. 1258/60.</p> <p>El Directorio del Banco Central dispuso por Resolución N° 405 del 27.06.89 (fs. 768/71) la intervención cautelar de la entidad, medida que se hizo efectiva el 28.06.89, conforme surge del Acta de Posesión que obra a fs. 767.</p>		



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.	11
<p>Es así que personal de este Banco Central realizó un procedimiento en la Sucursal Tres Arroyos, donde se halló diversa documentación sin contabilizar que probaría la existencia de una operatoria de captación de fondos marginal por parte de la entidad entre marzo de 1986 y diciembre de 1988 (fs.762/6).</p> <p>El detalle de la documentación encontrada luce a fs.762/6.</p> <p>Avalan lo expuesto copia de una denuncia presentada ante este Banco Central de la República Argentina por inversores de la sucursal González Chaves en las que ponen de manifiesto tal operatoria fs. 607/19, una fotocopia de una ficha extracontable que acredita la captación de un depósito en dólares a fs. 825 y el acta labrada al Gerente de la Sucursal Tres Arroyos a fs. 849/57.</p> <p>En la operatoria marginal la entidad efectuaba la retención del impuesto sobre los intereses que devengaban las transacciones (4,2 %), sin que dichos fondos fueran ingresados al fisco. Ello se acredita con la documentación obrante a fs. 772/85 (fs. 484 y 1258).</p> <p>Parte de esa captación fue blanqueada con certificados a plazo fijo emitidos entre abril y mayo de 1989, con contrapartida en préstamos a empresas, los que fueron otorgados en infracción a las normas sobre fraccionamiento del riesgo crediticio (fs. 952 y 1258/9).</p> <p>Este blanqueo, operado a partir del 13.04.89 y hasta el 13.05.89, instrumentado a través de certificados de depósito a plazo fijo contabilizados, se hizo jugar con préstamos que no habían implicado una real salida de fondos (fs. 762/6 y 1259).</p> <p>En la sucursal Tres Arroyos también se encontraron legajos de Caja de dicha casa del 05.04.89 al 26.04.89 y del 05.05.89 al 11.05.89 que tenían diferencias con los de la misma sucursal existentes, en la Casa Central -Bahía Blanca- fs. 572/95 (fs. 484).</p> <p>Al analizar los legajos de caja del mes de mayo de 1989 se observó que el día 02.05.89 en Bahía Blanca disminuía el rubro depósitos por A 7.514 miles, registrándose cancelaciones de préstamos por A 6.221 miles y al día siguiente se producía una variación de caja inversa (aumentaban los depósitos en A 6.740 miles y los préstamos en A 8.505 miles). Analizados los comprobantes se verificó que existían certificados, contabilizados como salida el día 02.05.89, que figuraban con sello de caja pagadora los días 3, 4 y 5 de mayo de 1989, los que fueron renovados esos días por el monto de la cancelación más el reconocimiento de intereses desde el vencimiento hasta la nueva imposición, quedando todo acreditado con la documentación de fs. 566/7 y acta de fs. 568/71 (fs. 483 y 514).</p> <p>Se encontraron en el archivo de Casa Central -Bahía Blanca- comprobantes emitidos por la sucursal González Chaves denominados "Movimientos de saldos bancarios" y "Sucursal ( 03) LIB A.G.Chaves", en los cuales ésta informaba -entre otros datos- su saldo de caja de los días 30.11, 05.12, 07.12, 09.12, 11.12.88 y 31.01.89 consignando importes menores a los contabilizados (fs. 484).</p> <p>Este falseamiento de los saldos de caja es una prueba más de los manejos que se hacían a fin de ocultar las irregularidades (fs. 485).</p> <p>El detalle de los incumplimientos advertidos surge de fs. 480/1 y 484/5, 489, 733/4y 762/5.</p>			





B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.	12
----------	--	--	----

Estos hechos fueron observados en el Memorando de Conclusiones de fs. 514, quinto párrafo, destacándose que esta operatoria era equivalente al 46,5 % de la cartera de depósitos de la entidad (fs. 941).

b) El período infraccional se halla comprendido entre marzo/86 a mayo/86 (fs. 1260).

En consecuencia, corresponde tener por acreditados los hechos constitutivos del Cargo 8, en violación a lo dispuesto por la Ley N° 21.526, artículo 30, primer párrafo; la Comunicación "A" 59, OPASI-1, Capítulo I y La Circular CONAU-1, B. Manual de Cuentas, Códigos 311000 - Depósitos. En pesos. Residentes en el país- y 315000 - Depósitos. En moneda extranjera. Residentes en el país-.

**Cargo 9 -Demora en el suministro de información por parte de la entidad a la inspección del Banco Central-.**

a) Los hechos que constituyen este cargo aparecen descriptos a fs. 1200.

El 15.05.89 la inspección N° 43/89 solicitó a la entidad, a través del memorando de fs. 666/8, las informaciones pertinentes, no habiendo recibido durante los primeros diez días documentación alguna respecto del temario y sólo en forma parcial e insuficiente sobre la situación financiera, motivo que obligó a reiterar memorandos y a labrar actas a directivos de la misma (fs. 532).

En los informes, partes de inspección, providencias y demás documentación (fs. 654, 661, 664, 677 y 679/81) se encuentra sustento probatorio suficiente de la infracción en análisis.

b) La conducta infraccional se verificó en mayo de 1989 (fs. 1260).

En consecuencia, corresponde tener por acreditados los hechos constitutivos del Cargo 9, en transgresión a lo previsto por la Ley 21.526, artículo 37.

El cargo 10 no se trata atento lo expuesto en el apartado 4 del presente.

**II. Que, analizados los hechos, en función de las constancias de autos, se han tenido por acreditados los Cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por el período infraccional que en cada caso se establece.**

**III. Que corresponde a continuación analizar la situación de los sumariados, así como determinar la responsabilidad en que incurrieron.**

**a. LA INVERSORA BAHIENSE S.A. COMPAÑÍA FINANCIERA (en liquidación).**

Mediante Resolución N° 405 del 27.06.89 el Directorio del Banco Central de la República Argentina (fs. 768/71) dispuso la intervención cautelar de La Inversora Bahiense S.A. Compañía Financiera por el término de 90 (noventa) días de acuerdo a las prescripciones del artículo 24 de la Ley N° 22.529.

Finalmente por Resolución N° 598 del 17.10.89 el Directorio del Banco Central de la República Argentina (fs. 553/5) resolvió revocarle la autorización para funcionar con carácter de compañía financiera privada local de capital nacional y disponer su liquidación, de acuerdo con lo





B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.
previsto por el art. 45, inciso a) de la Ley N° 21.526 (modificado por el art. 30 de la Ley N° 22.529) y el art. 26 de la Ley N° 22.529.		
Teniendo en cuenta que, conforme resulta de fs. 1608, la liquidación se encuentra firme desde el 14.05.91 y que se ha efectuado la distribución de fondos, deviene insoslayable archivar las actuaciones respecto de la entidad.		
<p><b>b. MANUEL EMILIO SANTAMARÍA</b> (vicepresidente desde el 13.12.85 al 23.05.89), <b>ADRIÁN FERNANDO SANTAMARÍA</b> (director desde el 08.05.87 al 27.06.89 y gerente general desde el 12.05.87 al 27.06.89) e <b>HILDA NORMA OTERO DE ELÍAS</b> (director desde el 08.05.87 al 10.04.89), fs. 1223/4, 1226, 1233/4, 1237 y 1380 vta.</p>		
La situación de los sumariados en examen será tratada en forma conjunta en virtud de haber presentado descargos de similar tenor (fs.1353/60, 1345/51, 1517, subfs. 1/5, 1518, subfs. 1/4, 1520, subfs. 1/5 y 1521, subfs. 1/5), sin perjuicio de señalarse las diferencias que presente cada caso.		
Corresponde analizar los argumentos defensivos expresados por los imputados, tendientes a excluir su responsabilidad.		
En cuanto a la mención que hacen los sumariados a fs. 1517, subfs. 1/5, y fs. 1518, subfs. 1/4, respecto a la caducidad de instancia que podría haberse operado en las presentes actuaciones -con fundamento en lo normado por la Ley de Procedimiento Administrativo- cabe manifestar que el proceso sumarial que nos ocupa se encuentra sujeto a las normas especiales de procedimiento establecidas por la propia autoridad de aplicación, conforme a lo establecido por el artículo 41 de la Ley N° 21.526. En este sentido se ha dispuesto que "Las sanciones de carácter contravencional que el Banco Central aplica a las entidades financieras es parte de una actividad estatal cumplida por una entidad autárquica dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y constituye un acto orgánicamente administrativo de sustancia policial, emitido en ejercicio de la potestad correctiva externa de la Administración Pública y regido como tal, por sus específicas disposiciones de procedimiento." (C. Nac. Cont. Adm. Fed. Sala II del 13/07/1982 "Groisman, Salvador y otros C. Resolución N° 114/79 del B.C.R.A.").		
Respecto del planteo de prescripción de la acción articulado por los sumariados a fs.1353/4, 1345/6 y 1517, subfs. 1 y 4, y 1520, subfs. 1/5, cabe señalar que no les asiste razón en virtud de lo establecido por el artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 (párrafo sexto), que dispone: "La prescripción de la acción que nace de las infracciones a que se refiere este artículo, se operará a los seis (6) años de la comisión del hecho que la configure. Ese plazo se interrumpe por la comisión de otra infracción y por los actos y diligencias de procedimientos inherentes a la sustanciación del sumario...".		
En tal sentido, cabe tener presente que el período infraccional se extiende hasta mayo de 1989 y que la Resolución Nro. 401 del Presidente del Banco Central de la República Argentina que dispuso la apertura del sumario data del 24.06.92 (fs.1263/4), es decir, se dictó con anticipación a la fecha en que hubiera operado la prescripción de la acción emergente de las infracciones reprochadas. Por otra parte, tanto la apertura a prueba (ver auto del 14.05.98, fs.1498/500) como el cierre del período de prueba (ver auto de fecha 07.03.03, fs. 1549/50) resultan, asimismo, actos interruptivos de la prescripción (conforme, además, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, Sala I, sentencia del 07.10.80, autos "ABERG COBO, Martín Antonio c/Resolución 314/78 del Banco Central"), e igualmente lo son todas las posteriores diligencias sumariales (Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo del 02.12.76, in re "Compañía Azucarera Ingenio Amalia S.A." y Dictamen del Procurador General de la Nación); la Cámara		





B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.	14
----------	--	--	----

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) ha sostenido que "... cada uno de los actos inherentes a la sustanciación del sumario producen la interrupción del plazo de prescripción por lo que desde cada uno de ellos debería iniciarse nuevamente el cómputo de los seis años, el que no ha transcurrido en el sub-lite ..." (fallo del 07.02.02, in re "Vidal Mario René c/B.C.R.A. - Resolución N° 150/00", Expediente N° 58.554/87 - Sumario N° 780).

En cuanto a lo argumentado acerca de la notificación de la resolución que dispuso la instrucción del sumario financiero (fs.1353 vta. y 1345 vta.), la jurisprudencia ya ha tenido oportunidad de expedirse, sosteniendo que: "... el acto administrativo tiene vida jurídica independiente de su notificación. Ésta tiene que ver con la vinculación o sujeción del particular al acto, mas no con su existencia (Hutchinson, T. L.N.P.A. comentada, Ed. Astrea, T. 1, pág. 229, párr. 1°). A mayor abundamiento, ha dicho el Alto Tribunal que constituyen actos de impulso procesal que interrumpen el curso de la prescripción, entre otros, la providencia que dispone instruir sumario y correr vista a la defensa (Fallos: 296:531) ..." (conf. sentencia del 19.02.98 dictada en autos "Banco Alas Cooperativo Limitado -en liquidación- y otros c/Banco Central de la República Argentina. Resolución N° 154/94", Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II).

Asimismo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) ha puntualizado que: "... Al respecto cabe recordar que el Superior Tribunal ha interpretado que en nuestro derecho positivo se ha optado por entender que la notificación hace a la eficacia del acto y no a su validez ... En ese sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que la falta de notificación dentro del término de vigencia de la ley, no hace a la validez del acto sino a su eficacia ..." (in re "Banco de Mendoza -actualmente Banco de Mendoza S.A.- y otros c/B.C.R.A., Resolución N° 286/99", Expediente N° 100.033/87, Sumario 798).

A fs. 1354 y 1346 pretenden la aplicación a este sumario de los principios del derecho penal. Al respecto, cabe tener presente que la jurisprudencia ha sostenido que: "... aparte de reiterar que media sustancial diferencia entre la responsabilidad penal y la administrativa surgida de los mismos hechos, lo que autoriza un diferente juzgamiento por dos jurisdicciones diferentes, en el caso de autos se discute la realización de una actividad que resulta violatoria de las disposiciones que rigen el sistema financiero, en tanto que en el proceso (judicial) se imputa a los procesados la comisión de delitos .... La decisión en sede penal para nada puede menguar la legitimidad del acto administrativo sancionador, desde que la responsabilidad administrativa tiene por finalidad la observancia de normas que hacen al exacto cumplimiento de la actividad financiera. El ejercicio de la potestad sancionadora es administración y el de potestad criminal es justicia..." (Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 4, in re "Alvarez, Celso Juan y otros c/Resol. N° 166 del Banco Central s/apelación -Expte. N° 101.167/80 Coop. Saénz Peña de Créd. Ltda.", fallo del 23.04.83, Causa N° 6.208).

Por otra parte, se ha expresado que: "... la actividad bancaria tiene una naturaleza peculiar que la diferencia de las otras de carácter comercial y se caracteriza especialmente por la necesidad de ajustarse a disposiciones y al control del Banco Central, una de cuyas funciones es aplicar la ley de bancos y vigilar su cumplimiento; por lo tanto, las sanciones que esta Institución puede aplicar tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de las medidas represivas del Código Penal (conf. C.S. Fallos 241:419; 251:343; 268:91; 275:265, entre otros)."

Por ello devienen inaplicables los principios del derecho penal a los sumarios financieros.





B.C.R.A.

Referencia  
Exp. N° 103.173/86  
Act.

En lo atinente a la cuestión de fondo, los imputados, tras negar todos y cada uno de los cargos, dan una serie de explicaciones que tan sólo están enderezadas a dejar a salvo su responsabilidad, alegando circunstancias que en modo alguno pueden justificar el apartamiento a la normativa aplicable.

Con relación a la cuestión constitucional y a la reserva de recurso extraordinario federal planteado no corresponde a esta instancia expedirse sobre el particular.

Debe tenerse presente que los sumariados poseían autoridad suficiente para impedir la comisión de los hechos antirreglamentarios que dieron lugar a las presentes actuaciones o, en su caso, para salvaguardar su responsabilidad, podían haber dejado constancia de su oposición a las desviaciones que se producían (conf. Autos Berchialla Luis s/ Recurso c/ Resolución N° 347/74, sentencia del 21.11.76).

Ha quedado claro, a través de los antecedentes obrantes en las actuaciones, que los sumariados no cumplieron con los deberes y obligaciones inherentes a la función asumida, ni acompañaron elementos idóneos que permitieran desvirtuar la existencia de los hechos objeto de reproche.

En lo que hace al cargo 4 (Inadecuada ponderación del riesgo crediticio con carencia de antecedentes en los legajos de los prestatarios, incumplimiento de disposiciones de carácter reglamentario y previsiones por riesgo de incobrabilidad insuficientes), Manuel Emilio Santamaría y Adrián Fernando Santamaría ( fs. 1355) e Hilda Norma Otero de Elías (fs. 1347 vta.), se limitan a reducir la cuestión a diferencias de interpretación de las normas, argumento que a todas luces resulta insuficiente para descartar la imputación que se hace.

Con respecto al cargo 7 (Excesos en el fraccionamiento del riesgo crediticio), manifiestan los sumariados, a fs. 1355 vta., que su irregular formulación impide su defensa porque no se entiende cual es la supuesta infracción imputada.

Basta con remitirse al Informe de Cargos (fs. 1257/8) para advertir que no les asiste razón ya que el sustento probatorio de los cargos aparece respaldado fundadamente con los elementos aportados por los funcionarios de este ente rector y, además, fue determinado al efectuarse las imputaciones con precisa descripción de los hechos incriminados e identificación de las normas transgredidas que imponían a los sumariados el deber de obrar de una manera determinada.

En cuanto al cargo 8 (Captación marginal de fondos y registraciones contables que no reflejaban la real situación patrimonial económica y financiera de la entidad), tanto Manuel Emilio Santamaría y Adrián Fernando Santamaría como Hilda Norma Otero de Elías manifiestan, a fs. 1356 y 1347 que con este cargo se comete un error por cuanto los funcionarios no advirtieron que estaban en presencia de un convenio entre las compañías financieras SIC y La Inversora Bahiense.

Al respecto, cabe señalar que la existencia del citado convenio no modifica el criterio en cuanto a la configuración del cargo 8, ya que éste se verifica sin perjuicio de las relaciones que pudieran existir entre las financieras. En efecto, las razones expuestas por los inspectores a fs. 762/5 y por formulación de cargos a fs. 1258/9 son suficientemente fundadas como para descartar que los agentes de esta institución incurrieran en erradas apreciaciones de la situación como sostienen los sumariados. Téngase presente que el convenio obra a fs. 52/53 razón por la cual, evidentemente, fue objeto de análisis por parte de quienes tuvieron la tarea de verificar que se dieran los extremos del caso para afirmar que tuvo lugar la imputación que se formula.





B.C.R.A.

Referencia  
Exp. N° 103.173/86  
Act.

A ello es del caso agregar que el ataque a las transacciones detectadas deviene de las irregularidades advertidas en su desarrollo y no del eventual arreglo de dos entidades para el manejo mutuo de sus asuntos. Tanto es así, que el síndico de la quiebra destaca, en oportunidad de presentar el informe previsto por el art. 40, que estas operaciones no eran contabilizadas.

Cabe tener en cuenta que apartamentos como los observados nacen de la omisión de cumplir las obligaciones que les estaban expresamente asignadas a los imputados en su condición de directores de la entidad.

En lo que hace al cargo 9 (Demora en el suministro de información por parte de la entidad a la inspección del Banco Central), Manuel Emilio Santamaría y Adrián Fernando Santamaría manifiestan (fs. 1356 vta./7) que de las actas levantadas por la inspección en la entidad surge la total colaboración de sus autoridades con ella, esto no es así porque a fs. 693 de los dichos de los funcionarios del Banco Central surge que en numerosas ocasiones fue solicitada información y que no fue posible acceder a la misma.

A fs. 1358 y 1349 vta. Adrián Fernando Santamaría e Hilda Norma Otero de Elías, manifiestan que las infracciones que se cuestionan no son dolosas. Al respecto, cabe tener presente que el bien tutelado por las normas es la solvencia del sistema bancario, por lo que la punibilidad reside en la contrariedad objetiva de la regulación y el daño potencial que de ello derive; consecuentemente, la posible existencia de dolo como resultado, son indiferentes.

Cabe destacar que el fin primordial de las normas emanadas de este Banco Central en materia de calificación y previsionamiento de los deudores es reflejar la realidad económica de las entidades de manera objetiva y mediante el análisis de la operatoria financiera en su conjunto y a través del tiempo, y no por actos aislados. Es decir, se trata del análisis global de una situación económico-financiera que la ex entidad debió efectuar desde el inicio y durante toda la relación crediticia.

Por otra parte, no resulta verosímil que el proceder reprochado pueda haber pasado desapercibido por los estratos superiores de la ex entidad investigada, dado que la decisión esperada del directorio de toda entidad financiera, en cuanto a la aprobación del previsionamiento de los deudores comprendidos, debe ser tomada en oportunidad en que procede efectuar la revisión de la clasificación según la periodicidad mínima en función del saldo de deuda que registre cada prestatario.

En orden a la determinación de la responsabilidad que les corresponde a los sumariados por las funciones directivas desempeñadas en La Inversora Bahiense S.A. Compañía Financiera., procede puntualizar que sus conductas generaron las transgresiones a la normativa aplicable en materia financiera, por lo que les cabe reproche en virtud de haberse desempeñado incorrectamente como integrantes del órgano de conducción de la ex-entidad, ya que la actividad del ente social se desarrolla mediante la actuación de sus dirigentes.

Era obligación de los sumariados ejercer sus funciones directivas dentro de las prescripciones legales y reglamentarias del sistema financiero, resultando evidente que al apartarse de ellas dieron lugar a la postre a la instrucción de este sumario.

La responsabilidad que les corresponde a los imputados por las transgresiones reprochadas es consecuencia ineludible de una omisión propia, que incluso tiene sustento normativo.





B.C.R.A.

Referencia  
Exp. N° 103.173/86  
Act.

en lo establecido por la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 para quienes desempeñen el cargo de directores titulares (artículos 59, 266 y 274).

Resultan de aplicación al caso los conceptos vertidos por el Tribunal de Alzada en cuanto a que: "... las personas o entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras conocen de antemano que se hallan sujetas al poder de policía financiero y bancario del Banco Central, y que es la naturaleza de la actividad y su importancia económica-social la que justifica el grado de rigor con que debe ponderarse el comportamiento de quienes tienen definidas obligaciones e incumbencias en la dirección y fiscalización de los entes financieros ..." (Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re "Hamburgo", sentencia del 08.09.92).

La Jurisprudencia ha señalado que: "... quienes tienen a su cargo la dirección de una entidad financiera deben extremar los recaudos de previsión, cuidado, prudencia, transparencia, vigilancia de las operaciones que se desarrollan en el ámbito de su competencia; debiendo para ello contar con pericia y conocimiento del delicado ámbito en el que despliegan su actividad. Asimismo estos deberes incluyen la asunción, el conocimiento, y el estricto cumplimiento de las precisas y permanentes regulaciones dictadas por el B.C.R.A...." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala 2, sentencia de fecha 6 de marzo del 2001, autos "Banco Crédito Provincial S.A. y otros c/B.C.R.A. -Resol 312/99-, Sumario Financiero N° 897").

Además ha sostenido la jurisprudencia que en la actividad bancaria "se encuentra presente el interés público en tanto las actividades financieras resultan ser una fuente creadora de dinero, lo que justifica sobradamente las atribuciones de control conferidas al Banco Central y las responsabilidades agravadas impuestas a los responsables de las entidades financieras con el fin de preservar el sistema financiero y monetario y la confianza que necesariamente debe depositar el inversor en aquellas entidades ..." (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala N° 4, fallo del 23.04.85, Causa 6208 "Alvarez, Celso Juan y otros c/ Resolución N° 166 del Banco Central s/ apelación, Expte. 101.167/80 Cooperativa Sáenz Peña de Crédito Limitada").

Asimismo ha sostenido que: "... un defectuoso contralor respecto a los créditos acordados y una imprudente administración en cabeza de funcionarios ... quedó configurada no sólo por la existencia de concentración de la cartera de deudores, sino también por el otorgamiento de créditos a empresas y/o personas sin el correspondiente respaldo de las garantías legales exigidas, además, de un incorrecto seguimiento de las registraciones volcadas en los legajos de créditos. Tales extremos, que no fueron desvirtuados ... trasuntan ... tachas de .... imprevisión en el manejo de la entidad, y en particular, en un área nítidamente vinculada con el grado de liquidez y solvencia .... (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, 08.02.96, Banco Central de la República Argentina en Banco de Intercambio Regional S.A. en liquidación, Causa N° 21.977).

La doctrina, por su parte, entendió que: "... El análisis de la solvencia moral y patrimonial del solicitante y sus avales, implica un elemento prioritario que imprime a la operación un riesgo sensiblemente menor, porque permite en forma previa, una estimación cuali-cuantitativa del prestatario y de su fiador y, en consecuencia, su elección. La acentuación de las exigencias está en relación creciente con la inaccesibilidad del crédito. Al contrario, la flexibilidad excesiva genera abandono de las buenas prácticas e incrementa los casos de morosidad e incobrabilidad ..." (ver Matura Adolfo: "Bancos, dinero y créditos", Editorial Depalma, 1981, página 58).

Como dirigente de la política crediticia en el mercado nacional, el Banco Central reglamenta la operatoria financiera, estableciendo mecanismos permanentes de contralor en





B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.
<p>salvaguarda de la clientela de las entidades y del crédito en general. En este marco, impuso a las entidades sometidas a su control la obligación de conocer la situación económica y financiera de sus clientes así como también su capacidad para reintegrar los fondos solicitados (Comunicación "A" 49, Capítulo 1, puntos 1.7 y 3.1), deber que no ha sido observado por la Inversora Bahiense S.A. Compañía Financiera.</p> <p>En síntesis, la inadecuada política de crédito implementada por la entidad es reveladora de la ausencia de recaudos mínimos que hacen a una sana gestión del negocio bancario.</p> <p>Las evidencias allegadas a la causa permiten afirmar que los sumariados no lograron acreditar que su accionar fuera ajeno a las tareas propias que, como integrantes del órgano directivo de la ex entidad, fueron llamados a cumplir, resultando notoria la falta de adopción de medidas enderezadas tanto a evitar como a corregir las anomalías descriptas.</p> <p>Ha quedado claro, con los antecedentes obrantes en las actuaciones, que los directores no cumplieron los deberes y obligaciones inherentes a su función, ni acompañaron elementos idóneos que permitieran desvirtuar los hechos objeto de reproche.</p> <p>Corresponde señalar que, en virtud de la condición de directores en una entidad dedicada a la actividad financiera, la responsabilidad resulta de la naturaleza misma de las funciones asumidas (conf. Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, sentencia del 18.09.84 en la Causa N° 6029 "Contin, Hugo Mario Giordano y otros c/ Resolución N° 99/83 del Banco Central s/apelación" y sentencia del 28.09.84 en Causa N° 2795 "Casa de Cambio Brasilia Mollón S.A.C. y F. c/ Resolución N° 456/81 Banco Central. Instrucción de sumario a la entidad y personas físicas"; Sala II, sentencia del 06.12.84 en autos "Berberian, Carlos Jacobo y otros c/ Resolución N° 477 del B.C.R.A. s/apelación artículo 41 de la Ley 21.526, Banco Ararat"; Sala III, sentencia del 03.05.84 en Causa B-1209 "Bunge Guerrico, Hugo M. c/ Resolución N° 594/77 del Banco Central" y Sala IV, sentencia del 23.04.85 en Causa N° 6208 "Alvarez, Celso Juan y otros c/ Resolución N° 166 del Banco Central s/apelación").</p> <p>En definitiva, las defensas que se esgrimen, lejos de tener un fundamento válido, solo están encaminadas a minimizar la importancia de las irregularidades que se reprochan y a dejar a salvo la responsabilidad frente a los hechos cuestionados, sin que los extremos invocados en modo alguno puedan justificar el apartamiento a la normativa aplicable en la materia.</p> <p>No cabe duda alguna que esta institución ha procedido a lo largo de la tramitación del sumario conforme a la normativa, siendo oportuno remarcar el respeto a los principios y garantías constitucionales que se corresponden con el debido proceso, el legítimo derecho de defensa y la aplicación rigurosa de la normativa ritual que es aplicable en esta especialidad. Es más, de la compulsa de autos surge que los sumariados no se han visto impedidos de ejercer su legítimo derecho de defensa, ser oídos, tomar vistas, presentar sus descargos, ofrecer y producir prueba, controlar evidencias y acceder a los actuados cuantas veces se lo han propuesto.</p> <p>Es de resaltar que los sumariados al aceptar actuar en una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina, también aceptaron voluntariamente la sujeción a la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y, por lo tanto, la posibilidad de ser sancionados en los términos del artículo 41 de dicha normativa frente al eventual incumplimiento de las normas de esta Institución.</p> <p>Sobre el particular "...la Corte Suprema ha señalado, en reiteradas ocasiones, que las llamadas 'Personas' o 'entidades' que menciona el art. 41 de la Ley de Entidades Financieras saben</p>		





B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.
<p>de antemano que se hallan sujetas al 'poder de policía bancario o financiero', en cuyo ejercicio incluso puede el legislador, sin desmedro constitucional, remitir a la reglamentación administrativa la descripción de conductas sancionables, dentro de los términos de la ley (Fallos 300:392 y 443)", conforme Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, Causa 6611 "José O. Pastoriza S.A., Cambio, Turismo y Bolsa y otros c/Resolución 278 del B.C.R.A. s/apelación", Expediente N° 101.003/80, sentencia del 04.10.84.</p> <p>Respecto de las pruebas ofrecidas por los sumariados a través de sus presentaciones de fs. 1349 vta./51 y 1358 vta./9, cabe remitirse a los autos de fs. 1498/1500 y fs. 1549/50, el primero de los cuales da cuenta de las razones por las que no se hizo lugar a determinadas pruebas solicitadas. Se estima oportuno aclarar que todas las constancias obrantes en el sumario fueron adecuadamente meritadas.</p> <p>En otro orden de ideas y con relación a los recursos de reconsideración y jerárquico interpuestos contra el auto de apertura a prueba (ver fs.1518, subfs. 1/4 y 1521, subfs. 1/5), procede señalar que las normas procesales aplicables en la tramitación de los sumarios previstos por el artículo 41 de la Ley N° 21.526, difundidas mediante la Comunicación "A" 90, Circular RUNOR 1-23 (aplicable al caso sub-examine) no prevén la posibilidad de recurrir tales decisiones.</p> <p>En efecto, conforme surge del punto 1.2.2.8.1 de la citada comunicación: "el Banco Central está facultado para rechazar la prueba que resulte improcedente -sin recurso alguno para el sumariado-".</p> <p>Atento ello procede rechazar ambos recursos.</p> <p>La Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante fallo de fecha 17.12.96, en autos: "Banco Regional del Norte Argentino c/Banco Central de la República Argentina, Causa N° 96.094", expresó que: "... según jurisprudencia de esta Corte, es perfectamente compatible con la Ley Fundamental la creación de órganos y procedimientos especiales -de índole administrativa- destinados a hacer más efectiva y expedita la protección de intereses públicos, lo que no debe entenderse como menoscabo de la garantía del debido proceso entre los particulares cuando -aún sin haber tenido plenitud de audiencia en sede administrativa (Fallos: 205:549 -Rep. LA LEY, VIII, p. 371, sum.9-)-, aparece asegurada la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional que efectúe un control suficiente de lo actuado en aquél ámbito para el debido resguardo de los derechos supuestamente lesionados..."</p> <p>La aplicabilidad de las normas de procedimiento emanadas de esta Institución y en este caso puntual las previstas en la Comunicación "A" 90, ha sido reconocida por el Decreto N° 722 del 03.07.96, modificado por Decreto N° 1.156/97 (que ha regulado la subsistencia de procedimientos especiales como el que aquí se trata, ver art. 2°) y avalada por la doctrina de la Excm. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al sostener que: "... la aplicación de la Circular RUNOR-1 al trámite de los sumarios que se instruyen con motivo de las infracciones previstas en el artículo 41 de la Ley 21.526 en lugar de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, tiene fundamento legal en el propio artículo 41 que dispone que el sumario ... se instruirá con audiencia de los imputados con sujeción a las normas de procedimiento que establezca la indicada Institución" (conf. vgr. sentencia de la Sala II del 01.09.92, autos "Caja de Crédito Villa Mercedes Coop. Ltda." y sentencia del 06.12.84 de la misma Sala, en autos "Berberian, Carlos Jacobo y otros c/Resolución N° 477 del B.C.R.A. s/Apel. art. 41 Ley 21.526").</p> <p>Por otra parte, para formar convicción, no es inexorable producir toda la prueba, atento a que la doctrina de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación entendió que "los jueces de la</p>		





B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.	21 20
----------	--	-------

causa no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas sino aquellas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones" (fallo del 12.02.87, Causa N° 40.263 "M. de H., E.M. c/Nación Argentina).

En virtud de ello, carecen de asidero las consideraciones de los sumariados sobre el particular, procediendo resaltar, además, que los fundamentos que determinaron tanto la existencia de las infracciones como la atribución de responsabilidad, no necesitan de nuevos elementos probatorios, resultando suficientes los que se encuentran agregados a la causa, por lo tanto, se ha obrado tal como prevé la normativa.

En consecuencia, no habiendo aportado los sumariados elementos que permitan desvirtuar la acusación que se les formulara y por lo expresado precedentemente corresponde: responsabilizar a Manuel Emilio Santamaría por los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; responsabilizar a Adrián Fernando Santamaría por los cargos 4, 7, 8 y 9 y absolverlo por los cargos 1, 2, 3, 5 y 6, teniendo en cuenta su período de actuación.; responsabilizar a Hilda Norma Otero de Elías por el cargo 8 y absolverla por los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, teniendo en cuenta su período de actuación.

**c. NORBERTO JULIO SARNARI** (síndico desde 13.12.85 al 12.04.89), fs.1223/4 y 1381vta.

Presenta su defensa a fs. 1370/81.

Con relación a los planteos esgrimidos por el sumariado a fs. 1370/1 (concretamente el referido a la prescripción de la acción y a la notificación de la resolución que dispuso la instrucción del sumario), corresponde dar aquí por reproducido lo señalado en el Considerando III, apartado b.

El sumariado efectúa una serie de afirmaciones que están enderezadas a dejar a salvo su responsabilidad frente a las imputaciones de autos, alegando circunstancias que en modo alguno pueden justificar la violación de la normativa aplicable.

Mediante los argumentos con los que pretende exculparse en realidad solo minimiza el carácter de las funciones de contralor de la sindicatura pero sin poder en modo alguno menguar la responsabilidad que se le atribuye. El deber de control y fiscalización inherente a la función que desempeñaba le apareja responsabilidad por los hechos ocurridos, dado que debía vigilar que la actividad de la entidad se desarrollara dentro de la normativa que la regía.

En cuanto a sus funciones como miembro del consejo de vigilancia, resulta aplicable al caso el artículo 281 de la Ley N° 19.550 que establece las de fiscalización, verificación y control.

Los consejeros deben vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatutos y decisiones de las asambleas, lo que importa un control de legalidad y legitimidad que, en el caso específico, debe extenderse a los requisitos impuestos por la Ley de Entidades Financieras y sus normas complementarias, ya que las funciones de la sindicatura no se limitan a salvaguardar el patrimonio de la sociedad sino que deben constituirse en garantía de una correcta gestión y tutela del interés público (conf. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, sentencias del 10.05.84, Causa N° 3.258 "Banco Credicoop Coop. Ltda. Sumario a la entidad y personas físicas c/ Resolución N° 661/81 Banco Central" y del 04.07.86, Causa N° 7129 "Pérez Alvarez, Mario A. c/ Resolución N° 402/83 Banco Central").

Coincidentemente, en lo que hace al ámbito específico de las entidades financieras, se ha establecido que "la obligación principal ... es exigir que los negocios sociales se ajusten



B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.	22 21
----------	--	-------

estrictamente a la normativa financiera vigente, apelando a las facultades que la ley les otorga para obtener el correcto cometido de su deber primordial, esto es, el control de legalidad de la actividad de la empresa que fiscalizan" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala N° 4, en autos "Pam Cía. Financiera (en liquidación) s/instrucción de sumario a personas físicas", fallo del 31.5.82).

En base a todo lo señalado es que deviene inequívoca la conclusión de que el sumariado no actuó como era su deber, ya que no efectuó eficientemente los controles exigidos por las disposiciones vigentes ni obró con la diligencia debida en las amplias facultades de vigilancia que la ley le atribuye (conf. arts. 294, inc. 1° y 9° de la referida Ley 19.550).

Es de destacar la especificidad del caso que nos ocupa, pues la actividad financiera es un sector en el que resultan comprometidos altos intereses públicos y privados que conllevan a extremar la vigilancia que debió haberse efectuado en la ex-entidad por parte de su órgano de fiscalización, dadas las características de su operatoria. En tal sentido, cabe recordar las expresiones de la jurisprudencia en cuanto a que: "... una entidad financiera no es un comercio como cualquier otro en el cual solo importa el interés particular del empresario en su búsqueda de mayor ganancia. En esta actividad se encuentra presente el interés público en tanto las entidades financieras a través de ella resultan ser una fuente creadora de dinero ..." (Causa N° 6208 "Álvarez Celso Juan y otros s/Resolución N° 166 del B.C.R.A. s/apelación Expte. N° 101.167, Cooperativa Sáenz Peña de Crédito Ltda.", Sala 4, fallo del 23.04.85).

Ha sostenido la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V: "...En cuanto la responsabilidad de quienes cumplieron funciones de síndicos, es dable recordar que entre las facultades que la ley de sociedades otorga a la sindicatura se encuentran las de examinar los libros y documentación de la sociedad, al menos una vez cada tres meses; verificar en igual forma y periodicidad las disponibilidades y títulos-valores, así como las obligaciones y su cumplimiento, pudiendo solicitar balance de comprobación; asistir con voz, pero sin voto a las reuniones de directorio; controlar la constitución y subsistencia de las garantías de los directores y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad; presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados; convocar a asamblea extraordinaria; vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto, reglamento y decisiones asamblearias (especialmente vigila el cumplimiento de las normas sobre liquidez y solvencia); control de la operatoria de los directores con la entidad; etc.). Estas atribuciones que le asigna la ley (art. 294, Ley de Sociedades Comerciales) no son meras facultades, ya que su ejercicio no depende del síndico, sino que, por el contrario, éste se encuentra obligado a ejercerlas para asegurar el buen desempeño de la fiscalización que le ha sido encomendada (Conf. Villegas, "Régimen Legal de bancos", Buenos Aires, 1987, p. 306/10; Halperín, "Sociedades Anónimas", Bs. 1975, p.529, 3, 14)... y "...la responsabilidad de los síndicos va más allá de las meras verificaciones contables y responsabilidad condigna ya que las funciones que establece la ley respecto de la sindicatura tiende no sólo a salvaguardar el patrimonio de la entidad sino garantizar una correcta gestión y a tutelar el interés público (esta Sala, 'Bunge Guerrico'; 'Banco Internacional', cit.; 'Perez Alvarez' 4/7/86; 'Devoreal' 2/10/88); por lo que tienen a cargo la fiscalización de la entidad deben comunicar a la autoridad correspondiente las irregularidades en el manejo de ésta ( Conf. Esta Sala, in re ' Fortaleza Caja de Crédito', del 20/10/92; 'Banco Multicredito S.A. y otros', del 14/9/99; 'Cardani Eduardo Humberto y otros', del 26/6/01)... -autos "Portesi, Juan Antonio y otros c/ BCRA Resol. 320/04 (Expediente 100.426/84. Sumario Financiero N° 566)" del 30.04.08-.



B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.	23 22
----------	--	--	-------

También sostuvo la jurisprudencia que: "...si bien los síndicos no ejercen la dirección de la sociedad, ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de una normal marcha de la sociedad es más importante individualmente que la de cada uno de los directores (del Dictamen de la Fiscalía General que la Cámara hace suyo)", (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, Comisión Nacional de Valores c/Aeropuertos Argentina 2000 S.A., fallo del 17.06.2005).

A todo evento, cabe resaltar que no se lo cuestiona por el mero hecho de haber sido síndico de la entidad inspeccionada sino por haber incumplido las tareas de control propias de su cargo. No es su designación como síndico la que trae aparejada el reproche formulado sino el incumplimiento de los deberes que le competían como integrante del órgano fiscalizador.

Dadas las características propias de las tareas a cargo de la sindicatura, no resulta extraña la imputación de una conducta omisiva al no haberse efectuado los controles necesarios para evitar la comisión de las infracciones, ya que esa es la función para la que fue designado.

Niega que le sean imputables los hechos que configuraron las infracciones reprochadas y haber tenido participación en los mismos. Sin embargo, no acompañó a estas actuaciones elementos idóneos tendientes a desvirtuar la existencia de los hechos constitutivos de la imputación.

Tampoco es procedente aceptar la imposibilidad de detectar, por parte de la sindicatura, desviaciones menores o de escasa significación dentro de la entidad bancaria, siendo que el artículo 294 de la citada Ley de Sociedades no exime a los síndicos de las obligaciones a su cargo en función de la trascendencia de las operatorias a controlar, aunque pueda constituir argumento para atemperar las sanciones a aplicar.

No basta para eximir de responsabilidad a los integrantes del órgano de control que no hayan actuado materialmente en los hechos, pues no desempeñaron su cometido de fiscalizar la actividad desarrollada por los directores y coadyuvaron de ese modo a la realización de las infracciones, por ausencia de control no justificable, que conforma una omisión complaciente.

A fs. 1372 el sumariado manifiesta que no cumplió ninguna tarea directa en la Ciudad de Bahía Blanca ni en las sucursales de González Chávez y Tres Arroyos, sino que su residencia era en la Ciudad de Buenos Aires y agregó que el órgano de vigilancia se encontraba integrado además por otros dos miembros que residían en la zona. Fácilmente se advierte que esos argumentos no resultan atendibles por cuanto al sumariado le cabía una específica responsabilidad como síndico que en forma alguna podía evadir alegando la existencia de otros responsables. Sus propios términos solo refuerzan el hecho de que se apartó de sus funciones por propia decisión, circunstancia que favorece condenar su proceder.

Por similares razones tampoco resulta aceptable la pretensión de cargar las culpas en el sector administrativo o en la auditoría -fs. 1373- por lo que corresponde su rechazo.

En lo que hace al cargo 8 (Captación marginal de fondos y registraciones contables que no reflejaban la real situación patrimonial económica y financiera de la entidad), se dan por íntegramente reproducidas aquí las distintas consideraciones señaladas en el Considerando I y Considerando III, apartado b.

A fs. 1371 vta manifiesta el sumariado su imposibilidad de ejercer el legítimo derecho de defensa, argumento que resulta a todas luces inadmisibile. En efecto, con la resolución que ordena instruir sumario en los términos del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras se da inicio a un



B.C.R.A.	Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.	24	23
----------	--	----	----

procedimiento reglado con participación de los sumariados, quienes pueden ejercer plenamente su derecho de defensa en cumplimiento del imperativo de la Ley N° 21.526. "La ley persigue posibilitar a quien resulte imputado, el pleno ejercicio del derecho de defensa dentro del denominado 'debido proceso adjetivo' que consiente y resguarda el derecho a ser oído y formular descargos. Ofrecer y producir pruebas. Obtener una decisión fundada" (conf. Eduardo A. Barreira Delfino. Ley de Entidades Financieras. ARBA, 1993, pág.187).

El sumario que nos ocupa tiene como fundamento arribar a la verdad material razón por la cual se satisficieron los requisitos procedimentales en lo que hace al ejercicio del derecho de defensa de cada uno de los sumariados, quienes han tenido oportunidad de tomar vista de los actuados, presentar sus descargos y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho, asegurando así que éste no se vea menoscabado.

Es de resaltar que el sumariado al aceptar actuar en una entidad financiera autorizada por el Banco Central de la República Argentina, también aceptó voluntariamente la sujeción a la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y, por lo tanto, la posibilidad de ser sancionado en los términos del artículo 41 de dicha normativa frente al eventual incumplimiento de las normas de esta Institución.

Por otro lado, atenta la gravedad de los hechos infraccionales, el síndico a cargo de la quiebra de la La Inversora Bahiense S.A. Compañía Financiera extendió la calificación de fraudulenta y culpable a todos los miembros del Directorio y Sindicatura ( fs. 1529, subfs. 30).

A tenor de lo expuesto, en virtud de la importancia del rol desempeñado por el señor Norberto Julio Sarnari surge que éste ejerció sus funciones de manera poco diligente. Por otra parte, dado que por sus funciones debió actuar cuidando primordialmente el buen funcionamiento de las áreas cuyo debido control y administración estaba a su cargo, haciendo cumplir fielmente las disposiciones vigentes, ante su falta de puntual intervención, procede responsabilizarlo por los ilícitos que le fueran imputados.

En lo que al caso federal planteado a fs. 1376, no corresponde a esta instancia expedirse sobre el particular.

Respecto de las pruebas ofrecidas por el señor Norberto Julio Sarnari debe estarse a lo resuelto a fs. 1498/1500 y fs. 1549/50. Se estima oportuno aclarar que todas las constancias obrantes en el sumario fueron adecuadamente meritadas.

Tomando en consideración el período infraccional imputado (diciembre de 1985 a mayo de 1989) y el período de actuación del señor Norberto Julio Sarnari -13.12.85 al 12.04.89-, fs. 1223/4, y (fs. 1381 vta.) se advierte claramente que al tiempo de los hechos constitutivos de los cargos 7 y 9 reprochados, el citado no ejerció función en "La Inversora Bahiense S.A. Compañía Financiera".

En consecuencia, atento que el señor Norberto Julio Sarnari no acreditó debidamente sus dichos y en razón de todo lo demás expuesto, corresponde responsabilizarlo por los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8 del presente sumario, en razón del deficiente ejercicio de las funciones fiscalizadoras a su cargo, y, teniendo en cuenta su período de actuación en la entidad -desde 13.12.85 al 12.04.89-, absolverlo por los cargos 7 y 9.

**d. ALEJANDRO OSCAR SINIGAGLIA** (síndico desde el 12.04.88 al 12.04.89) fs. 1224, 1242, 1381 vta. y Acta 36 del Libro de Actas de Asamblea N° 2 del 12.04.88.





B.C.R.A.

Referencia  
Exp. N° 103.173/86  
Act.

Presenta su defensa a fs. 1482/4.

Tomando en consideración el período infraccional imputado (diciembre de 1985 a mayo de 1989) y el período de actuación del señor Alejandro Oscar Sinigaglia -12.04.88 al 12.04.89-, quien renuncia según consta a fs. 1486, se advierte claramente que al tiempo de los hechos constitutivos de los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, no ejerció funciones en la entidad, razón por lo cual corresponde absolverlo respecto de ellos.

Sin embargo, sí corresponde imputarle el cargo 8 por cuanto tuvo lugar desde marzo de 1986 hasta mayo de 1989, inclusive, y ello por el período durante el que actuó efectivamente.

El sumariado efectúa una serie de afirmaciones que están enderezadas a dejar a salvo su responsabilidad frente a las imputaciones de autos, alegando circunstancias que en modo alguno pueden justificar la violación de la normativa aplicable.

Niega que le sean imputables los hechos que configuraron las infracciones reprochadas y haber tenido participación en los mismos, sin aportar elementos que sustenten debidamente sus manifestaciones.

En lo que hace al cargo 8 (Captación marginal de fondos y registraciones contables que no reflejaban la real situación patrimonial económica y financiera de la entidad), cabe tener presente que si bien presentó su renuncia (ver Acta del 23.05.89) lo hizo hacia el final del período que se le atribuye, quedando sin justificar la etapa previa que para él comienza el 12.04.88.

Se dan por íntegramente reproducidas aquí las distintas consideraciones señaladas en el Considerando I, cargo 8, y en el Considerando III, apartado b.

Respecto de las pruebas ofrecidas por el señor Alejandro Oscar Sinigaglia debe estarse a lo resuelto a fs. 1498/1500 y fs. 1549/50. Se estima oportuno aclarar que todas las constancias obrantes en el sumario fueron adecuadamente meritadas.

En consecuencia, atento que el señor Alejandro Oscar Sinigaglia no acreditó debidamente sus dichos y en razón de todo lo demás expuesto, corresponde responsabilizarlo por el cargo 8 del presente sumario, en razón del deficiente ejercicio de sus funciones fiscalizadoras a su cargo, y teniendo en cuenta su período de actuación en la entidad -desde 12.04.88 al 12.04.89- absolverlo por los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9, dado las fechas de las infracciones.

e. **JOSÉ ANTONIO GORDOVIL** (director desde el 13.12.85 al 12.04.88) y **NORBERTO DANIEL MONTEVERDE** (director desde el 13.12.85 al 31.10.86), **CATALDO HÉCTOR CENTINEO** (síndico desde el 13.12.85 al 08.05.87), **ROBERTO HUGO PRIETO** (síndico desde el 13.12.85 al 08.05.87) y **MARCELO CARLOS JUNCA** (síndico desde el 12.04.88 al 12.04.89), fs.1223/4, 1227, 1243 y 1381vta.

Los imputados en examen se desempeñaron como directores y síndicos titulares de La Inversora Bahiense S.A. Compañía Financiera (e. l.) durante el período arriba indicado en cada caso.

Asimismo, se estima oportuno aclarar, que conforme surge de la constancia del Acta N° 35 del 08.05.87 del Libro de Actas de Asamblea N° 2, que se encuentra en Anexo sin acumular, la renuncia presentada con fecha 20.10.86 por el señor Norberto Daniel Monteverde fue aceptada por la ex entidad el 31.10.86; la renuncia presentada por el señor José Antonio Gordovil fue aceptada



B.C.R.A.

Referencia

Exp. N° 103.173/86

Act.

27

Formula, además, distintas adjetivaciones y valorizaciones referidas al accionar de los funcionarios de esta institución y a la tramitación del presente sumario que, desde su punto de vista, evidenciarían la vulneración de diversos principios, derechos y garantías constitucionales. No cabe duda alguna que esta institución ha procedido a lo largo de la tramitación del sumario conforme a la normativa, siendo oportuno remarcar el respeto a los principios y garantías constitucionales que se corresponden con el debido proceso, el legítimo derecho de defensa y la aplicación rigurosa de la normativa ritual, todo lo cual es aplicable en esta especialidad. Es más, de la compulsa de autos surge que el sumariado no se ha visto impedido de ejercer su legítimo derecho de defensa, ser oído, tomar vistas, presentar sus descargos, ofrecer y producir prueba, controlar evidencias y acceder a los actuados cuantas veces se lo ha propuesto.

Respecto de las pruebas ofrecidas por el señor Jorge Eduardo Cotabarren debe estarse a lo resuelto a fs. 1498/1500, donde se da cuenta de las razones por las que no se hizo lugar a determinadas pruebas solicitadas, como así a lo decidido en el auto de fs. 1549/50. Se estima oportuno aclarar que todas las constancias obrantes en el sumario fueron adecuadamente meritadas.

En consecuencia, no habiendo aportado el sumariado elementos que permitan desvirtuar la acusación que se le formula y por lo expresado precedentemente, se responsabiliza al señor Jorge Eduardo Cotabarren por el cargo 8, en razón del deficiente ejercicio de las funciones gerenciales a su cargo.

**g. JOSÉ MARIO ENTERRÍOS** (síndico desde el 23.05.89 hasta el 27.06.89), **NÉSTOR MARIO GONZÁLEZ** (síndico desde el 23.05.89 hasta el 27.06.89), **OSCAR IVAN DUKART** (síndico desde el 23.05.89 hasta el 27.06.89), fs. 1381 vta., 1224 y 1244/6 y **GUSTAVO FABIÁN ELÍAS** (vicepresidente desde el 23.05.89 al 27.06.89), fs. 1380vta/1381vta., 1224 y 1241.

La situación de los nombrados se tratará en conjunto.

Tomando en consideración el período infraccional (diciembre/85 a mayo/89) y el período de actuación de los señores Enterríos, González, Dukart y Elías, se advierte claramente que al tiempo de los hechos constitutivos de los cargos reprochados, los citados no ejercían funciones en La Inversora Bahiense S.A. Compañía Financiera -e.l.-. Por otra parte, tampoco surge de autos que los nombrados hayan intervenido en los ilícitos cuestionados.

En consecuencia, corresponde absolver de todos los cargos imputados a los señores José Mario Enterríos, Néstor Mario González, Oscar Iván Dukart y Gustavo Fabián Elías.

#### **h. DORA ROSA BERTINELLI DE TORQUATTI y FERNANDO ELÍAS**

Las constancias obrantes a fs. 1494 y 1542, subfs. 2, acreditan debidamente el fallecimiento de las personas del epígrafe. En virtud de ello corresponde, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 59, inciso 1°, del Código Penal, declarar extinguida la acción en estos actuados respecto de Dora Rosa Bertinelli de Torquatti y Fernando Elías quienes se desempeñaron como director y presidente, respectivamente.

#### **IV. CONCLUSIONES.**

Que, por todo lo expuesto, corresponde sancionar a las personas físicas halladas responsables de acuerdo con lo previsto en el artículo 41, de la Ley de Entidades Financieras N°





B.C.R.A.		Referencia Exp. N° 103.173/86 Act.
----------	--	--

21.526, graduando las penalidades en función de las características de las infracciones y ponderando las circunstancias de los ilícitos.

La Gerencia Principal de Estudios y Dictámenes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias ha tomado la intervención que le compete.

Esta instancia se encuentra facultada para la emisión del presente acto, conforme surge de los Dictámenes de la SEFyC Nros. 282/08 y 307/08, de los cuales surge la posibilidad de que el Presidente ejerza la competencia atribuida por el artículo 47, inciso f), de la Ley 24.144, mientras no sean cubiertos los cargos de Superintendente y Vicesuperintendente.

Por ello,

**EL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

**RESUELVE:**

1º) No hacer lugar a los planteos de prescripción de Manuel Emilio Santamaría, Adrián Fernando Santamaría, Hilda Norma Otero de Elías y Norberto Julio Sarnari.

2º) No hacer lugar a los planteos de caducidad de Manuel Emilio Santamaría, Adrián Fernando Santamaría e Hilda Norma Otero de Elías.

3º) No hacer lugar a los recursos de reconsideración y jerárquico en subsidio de Manuel Emilio Santamaría, Adrián Fernando Santamaría e Hilda Norma Otero de Elías.

4º) Declarar extinguida la acción respecto de los señores Dora Rosa Bertinelli de Torquatti y Fernando Elías por hallarse acreditado su fallecimiento.

5º) Archivar de las presentes actuaciones a La Inversora Bahiense S.A. Compañía Financiera (e. l.).

6º) Absolver de los cargos que les fueron imputados en el presente sumario a los señores Gustavo Fabían Elías, José Mario Enterrios, Néstor Mario González y Oscar Iván Dukart.

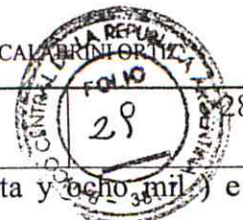
7º) Absolver a Adrián Fernando Santamaría respecto de los cargos 1, 2, 3, 5 y 6; Hilda Norma Otero de Elías respecto de los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9; Alejandro Oscar Sinigaglia respecto de los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9; José Antonio Gordovil respecto de los cargos 7 y 9; Norberto Daniel Monteverde respecto de los cargos 3, 4, 5, 7 y 9; Cataldo Héctor Centineo respecto de los cargos 7 y 9; Roberto Hugo Prieto respecto de los cargos 7 y 9; Marcelo Carlos Junca respecto de los cargos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9.

8º) Imponer las siguientes sanciones en los términos del artículo 41, incisos 3º y 5º, de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526:

Al señor Manuel Emilio Santamaría multa de \$ 425.000 (pesos cuatrocientos veinticinco mil) e inhabilitación por 4 ( cuatro ) años.

Al señor Norberto Julio Sarnari multa de \$ 323.400 (pesos trescientos veintitrés mil cuatrocientos) e inhabilitación por 3 (tres) años.





B.C.R.A.

Referencia  
Exp. N° 103.173/86  
Act.

Al señor José Antonio Gordovil multa de \$ 298.000 (pesos doscientos noventa y ocho mil) e inhabilitación por 2 (dos) años.

Al señor Adrián Fernando Santamaría multa de \$ 209.000 (pesos doscientos nueve mil) e inhabilitación por 2 (dos) años.

A la señora Hilda Norma Otero de Elías multa de \$ 200.000 (pesos doscientos mil) e inhabilitación por 2 (dos) años.

Al señor Jorge Eduardo Cotabarren multa de \$ 200.000 (pesos doscientos mil) e inhabilitación por 2 (dos) años.

A cada uno de los señores Cataldo Héctor Centineo y Roberto Hugo Prieto sendas multas de \$193.400 (pesos ciento noventa y tres mil cuatrocientos) e inhabilitación por 1 (un) año.

Al señor Norberto Daniel Monteverde multa de \$ 129.100 (pesos ciento veintinueve mil cien) e inhabilitación por 1 (un) año.

A cada uno de los señores Alejandro Oscar Sinigaglia y Marcelo Carlos Junca sendas multas de \$ 60.000 (pesos sesenta mil).

9º) El importe de las multas mencionadas deberá ser depositado en este Banco Central de la República Argentina en "Cuentas Transitorias Pasivas -Multas- Ley de Entidades Financieras -Artículo 41", dentro de los 5 (cinco) días de notificada la presente, bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la vía de ejecución fiscal prevista en el artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526, modificado por la Ley N° 24.144.

10º) Notifíquese, con los recaudos que establece la Comunicación "B" 9239 del 08.04.08 (B.O. 02.05.08), en cuanto al régimen de facilidades de pago oportunamente aprobado por el Directorio, por el cual podrán optar -en su caso- los sujetos sancionados con la penalidad prevista por el inciso 3º del artículo 41 de la Ley de Entidades Financieras N° 21.526.

11º) Hágase saber a los sancionados que las sanciones impuestas únicamente podrán ser apeladas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, en los términos del artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras.

12º) Notifíquese la sanción impuesta a los señores Norberto Julio Sarnari, Cataldo Héctor Centineo, Roberto Hugo Prieto, Alejandro Oscar Sinigaglia y Marcelo Carlos Junca a los Colegios Profesionales respectivos.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MARTIN P. REDRADO  
PRESIDENTE

*[Handwritten mark]*



